

Burundi se sumerge en el infierno

Carles Casals *

EN 1961 las primeras elecciones de Burundi parecían mostrar que las diferencias étnicas no tenían por qué ser un obstáculo para el futuro del país. Al contrario, la elección por mayoría aplastante del rey tutsi, Rwagasore IV, como presidente del entonces autónomo Burundi, era el presagio de un prometedor futuro para este pequeño país del corazón de África. Sin embargo, el asesinato del monarca unas semanas después de los comicios abrió la tapa de la caja de Pandora que dejó el país en manos de las rivalidades étnicas, sumergiéndolo en una espiral de violencia que aún hoy no ha terminado.

Los tutsi se hicieron con el poder y durante treinta años impidieron por todos los medios que los hutus tuvieran siquiera la posibilidad de controlar los destinos de una nación en la que representaban el 86 por 100 de la población. Las elecciones de 1993, tras un proceso de democratización que se inició en 1990, llevaron al poder al primer presidente hutu que obtuvo el 65 por 100 de los sufragios. Aquellas elecciones podrían haber sido un ejemplo para otras naciones africanas que, en los 90, se han ido añadiendo a la larga lista de países con sistemas democráticos; sin

* Periodista.

embargo, de nuevo un asesinato, el de su presidente, el hutu Melchor Ndadaye, volvió a hundir Burundi en la peor de las pesadillas.

Como en el principio de su historia como estado, gobiernos débiles se han sucedido desde las elecciones de 1993. Con todo, la pregunta que se nos antoja es ¿por qué no está siendo posible la paz en Burundi?

Los hechos de julio de 1996

LA muerte de más de 300 miembros de la etnia tutsi a manos de extremistas hutus, en Bugendana, el pasado 20 de julio, fue la excusa que precisaban las elites tutsis de Bujumbura para empujar al ejército burundés a intervenir en la vida política y acabar, al menos temporalmente, con el proceso democratizador del país. En efecto, la matanza de Bugendana se añadía a las que en mayo habían segado la vida a más de 1.200 personas —la mayoría hutus— y en junio habían provocado la muerte de, al menos, 700 personas —la mayoría tutsis—.

Esas víctimas del odio étnico se añadían a los más de 150.000 asesinados [otras fuentes hablan de 250.000] en los enfrentamientos interétnicos que han devastado este pequeño país africano desde que en octubre de 1993 terminaran violentamente con la vida del primer presidente electo, Melchor Ndadaye. Y a la barbarie de los asesinatos en masa se le añadía la impunidad de las fuerzas armadas implicadas en crímenes políticos, desapariciones, juicios sin garantías... y la sinrazón de una guerrilla hutu que ha basado su política en sembrar el terror mediante el asesinato sistemático e indiscriminado de familias tutsis.

Aunque no declarada, la guerra civil es una realidad en Burundi: ya antes del golpe de julio de 1996, 13 de las 16 provincias del país estaban en situación de guerra. Y, amparado en el drama que sumía a su país, llega el que los medios de comunicación oficiales denominaron «el hombre correcto en el momento oportuno»: Pierre Buyoya.

El golpe de Estado que el pasado 25 de julio terminó con el exangüe proceso democrático de Burundi hace prever que la paz dista mucho de llegar a la región. El retorno del que ya fuera presidente entre 1987 y 1993 en el país, el Mayor Pierre Buyoya, afianza el poder de quienes desde 1962 lo detentaron en Burundi: la minoría tutsi.

La reacción ante el golpe por parte de la diplomacia internacional y, especialmente, la de los países africanos, no se hizo esperar y apenas una

semana después, el 31 de julio, en la ciudad tanzana de Arusha, la Organización para la Unidad Africana y, especialmente, los estados vecinos de Burundi, decidieron aplicar sanciones al nuevo régimen de Bujumbura. Se trataba de una medida encaminada a evitar nuevas tentativas militares en una África que avanza, en estos años 90, hacia nuevos modelos políticos más participativos y democráticos. Cuando menos, Tanzania ha insistido en que, por su parte, las sanciones contra el nuevo régimen burundés se van a aplicar.

Sin embargo, las sospechas de la implicación de Estados Unidos y Bélgica en el golpe de Buyoya convierten las sanciones en meras formalidades «diplomáticas» previas al reconocimiento, en breve, del nuevo gobierno. En efecto, los intereses económicos belgas en la industria transformadora del mineral de oro en Burundi, amenazados recientemente por la guerrilla hutu, podrían ser una de las razones que animaran a un golpe encaminado a fortalecer la seguridad, cuando menos, en el área de Bujumbura.

Ahora sólo bastarán las promesas de reconducir el país al proceso democrático y de restaurar la disciplina en el seno del ejército nacional, como ya hizo el pasado 28 de julio el presidente Buyoya. Entre las propuestas del actual mandatario destacan la organización de un «debate nacional» que permita enfocar el proceso democratizador en el país de acuerdo a «nuestra experiencia, nuestra cultura y nuestra realidad», según palabras textuales del militar golpista. Porque, en definitiva, Buyoya considera que «previo a la restauración de la democracia, hay que detener el genocidio». Lo cierto es que las matanzas de los últimos meses nada tenían que envidiar al genocidio que se saldó con la muerte de casi medio millón de tutsis ruandeses entre abril y junio de 1994. Además cabe recordar que las matanzas contra la población tutsi de Burundi, en los meses siguientes al fallido golpe de octubre de 1993, fueron un anticipo del genocidio ruandés de la primavera de 1994.

La violencia que desembocó en el golpe del pasado mes de julio en Burundi tuvo dos fases muy claras: la primera, el primer golpe de Estado contra el proceso democrático, en 1993. Tras aquel fallido (?) golpe, la respuesta: grupos de hutus salieron a las colinas a «cazar y matar» tutsis. Lo que inmediatamente provocó el temor entre la población hutu que optó por ponerse a salvo de un eventual ataque de los militares contra ellos: se bloquearon las carreteras, se destruyeron puentes... todo para evitar represalias. La segunda fase fue azuzada por el resentimiento de

ciertas autoridades burundesas hutus, especialmente de los sectores más intransigentes del partido gubernamental, el FRODEBU (Frente para la Democratización de Burundi) huidos tras el golpe, que desde Ruanda y a través de las ondas de la oficial Radio Ruanda se encargaron de transmitir mensajes cargados de odio contra los tutsis...

Tierra de campesinos pobres

LOS datos sobre las condiciones y calidad de vida de los burundeses son altamente preocupantes. Por ejemplo, la esperanza de vida en Burundi es extremadamente baja: 38 años para los varones y 42 años para las mujeres; el índice de mortalidad infantil toca el 112 por 1.000; y el 50 por 100 de la población mayor de 15 años es analfabeta.

Con una población de 6.262.429 de habitantes (1995) distribuidos en un área de 27.830 kilómetros cuadrados y situado en la zona de los grandes lagos africanos (Tanganika), Burundi es una tierra fértil: un 85 por 100 del suelo burundés está permanentemente cultivado, el 43 por 100 del suelo es apto para el cultivo y un 35 por 100 son prados y pastos; a éstos, hay que añadir el 2 por 100 de bosques y selvas...

El subsuelo del país es también rico en níquel, uranio, cobalto, cobre, platino, vanadio y otros minerales estratégicos. Pero ninguna de estas materias primas representa importantes beneficios para la economía nacional. En efecto, en este país donde el 90 por 100 de los pobladores viven de la agricultura de subsistencia, el café representó, en 1993, el 81 por 100 de las exportaciones.

Por otra parte, las infraestructuras son mínimas. No existe el ferrocarril y sólo están pavimentados 640 kilómetros de los 5.900 que tiene la red de carreteras.

El pueblo burundés es mayoritariamente hutu (86 por 100) y, sin embargo, desde la independencia del país, en 1962, el gobierno de la nación ha estado en manos de la minoría tutsi (13 por 100), y existe también una minoría túa (pigmeos) que representan un 1 por 100 de la población. La mayoría de los burundeses ha encontrado en las colinas y planicies su hábitat, viviendo de los productos que daba la tierra y de algunas cabezas de ganado.

Invadidos primero por los alemanes, más tarde por los belgas, los burundeses no alcanzaron su independencia hasta 1962, un año después que el partido de la Unidad y del Progreso Nacional (UPRONA) ganara las primeras elecciones democráticas celebradas en el país y que permitieron a los burundeses dar los primeros pasos hacia la constitución de un estado soberano. Liderados por el rey Rwagasore IV, los burundeses empezaron a caminar hacia la independencia de su país. Este monarca tutsi intentó ser el «rey de todos los burundeses». Pero apenas un mes después, Rwagasore IV es asesinado desvaneciéndose con él las expectativas de un futuro común para todos los pobladores de la nación. A Rwagasore le sucede Mwambutsa IV —su padre— que rompió con la línea constitucionalista propuesta por el anterior monarca. De esta manera, cuando los belgas se retiran del país, en julio de 1962, la situación ya estaba lo suficientemente envenenada —y por tanto mucho más controlable para sus intereses en la ex colonia— como para prever que el futuro sería aciago para el pueblo de Burundi.

Tres décadas de odio

LA inestabilidad en los primeros años marcó la tónica general del país. Los primeros ministros se sucedían y era imposible aplicar una política de desarrollo que permitiera encaminar la nación hacia el progreso económico y social. Las elecciones de mayo de 1965 dan la mayoría absoluta a las fuerzas de disciplina hutu; sin embargo, haciendo caso omiso de los resultados electorales, el rey Mwambutsa nombra a un primer ministro tutsi. La inquietud se acentúa entre la población hutu. En octubre de aquel año, y so pretexto de un fallido golpe de Estado urdido por militares hutus, se lleva a cabo una amplia purga dentro del ejército y se elimina físicamente a casi toda la oficialidad de esa etnia.

En noviembre de 1965, el capitán Michel Micombero da un golpe de Estado, depone al rey tutsi, Charles Ntare, que apenas hacía un mes había sustituido a su padre, Mwambutsa IV, y proclama la república. Una de las primeras medidas tomadas por el capitán golpista fue «limpiar» la administración de funcionarios hutus. La reacción de éstos no se hace esperar y arreciaron las protestas contra el Gobierno. La situación se desborda y la respuesta de los tutsis en el poder fue implacable: una feroz represión

contra los hutus y contra los clanes tutsis opuestos a la política del Gobierno.

En este contexto de violencia, se llega a uno de los episodios más sangrientos de la historia reciente de África: entre 1971 y 1972, entre 100.000 y 150.000 hutus mueren y otros 70.000 consiguen huir del país. Entre los objetivos previstos por este genocidio estaba el decapitar el movimiento popular hutu, eliminando a todos los hutus con estudios.

La reacción internacional ante las matanzas fue nula. El mundo tenía los ojos puestos en Vietnam, en el drama de Biafra y en la Guerra Fría... Esta coyuntura permitió que el Gobierno mantuviera prácticamente intactas sus relaciones bilaterales y multilaterales. Cuatro años más siguió Micombero en el poder, hasta que, incómodo para las elites tutsis, el coronel Jean Baptiste Bagaza es empujado a derrocarlo en noviembre de 1976.

Bagaza no introdujo grandes cambios en las líneas generales establecidas por su predecesor. A lo sumo, una amplia campaña contra la Iglesia católica a la que acusaba de complicidad con los hutus. Los misioneros católicos desempeñaban un papel primordial en un país donde el 62 por 100 de la población es católica. El trabajo de la Iglesia en los sectores educativo y sanitario, especialmente en las zonas rurales, inevitablemente, beneficiaba a los hutus lo que levantaba la suspicacia del Gobierno. Bagaza tomó medidas tan impopulares como el cierre de las escuelas de catecismo que, en su mayoría, no eran sino colegios donde los niños y niñas hutus podían acceder a una educación básica.

A Bagaza lo sustituye otro militar, el mayor Pierre Buyoya. El 3 de septiembre de 1987, una revuelta de palacio termina con el decenio de Bagaza y la situación parece relajarse para los grupos opositores que ven liberados a cientos de sus dirigentes y simpatizantes. Pero el régimen continuaba en manos de la minoría tutsi. Así que uno de los problemas de fondo no quedaba resuelto.

Tiempos de guerra

BUYOYA se encuentra entre los extremistas tutsis y los extremistas hutus. El primer semestre de 1988 se caracterizó por la extrema violencia que iba devastando el país. Grupos radicales hutus se responsabilizan de matanzas contra comunidades tutsis y

atentados contra las fuerzas armadas. La represalia, por parte del ejército gubernamental, no se hace esperar y en agosto de 1988 una nueva página de terror y sangre mancha la reciente historia de este pequeño país africano: las ejecuciones masivas se ponen al orden del día y, al menos, 20.000 hutus mueren a manos del ejército tutsi; 60.000 hutus huyen a los países vecinos.

Pero el programa democratizador, impulsado por Buyoya, no se detiene. Quizás por las fuertes presiones internacionales, quizás por la insostenibilidad de la situación interna, el proceso siguió adelante: propuestas públicas para la reconciliación, la Carta de la Unidad Nacional (adoptada en febrero de 1991), una nueva Constitución (promulgada el 13 de marzo de 1992) y unas elecciones limpias (en junio de 1993) que entregaron el poder al Frente para la Democratización de Burundi (FRODEBU), mayoritariamente hutu, de Melchor Ndadaye, parecían demostrar que Burundi podría ser un ejemplo, como parecía que iba a ser en 1961, para el resto de África.

Pero la historia se repite y pasados cuatro meses desde aquellos comicios cargados de esperanza para un Burundi exhausto y temeroso de su propia gente, el 21 de octubre de 1993 da un nuevo paso hacia el infierno: un intento de golpe de Estado termina con la vida de Melchor Ndadaye y de algunos de sus ministros. Los ánimos se exacerban y una oleada de matanzas cubre de sangre todo el país.

Así, tras el golpe fallido de octubre de 1993 se radicalizan las posturas y se desata un proceso de violencia sin precedentes: grupos extremistas hutus apoyados por el Gobierno ruandés (entonces en poder hutu) y azuzados por los mensajes incendiarios emitidos desde Radio Ruanda por políticos exiliados del FRODEBU inician un proceso de matanzas sistemáticas cuyas víctimas serán los miembros de la minoría tutsi. Más de 100.000 personas morirán en esta vorágine.

En diciembre de 1993, la que fuera primera ministra, Sylvie Kinigi, tutsi, advertía y reiteraba que su país estaba al borde de la desintegración por la brutal violencia desatada desde el fallido golpe de Estado. Si no se producía una intervención internacional que detuviera la violencia étnica el país se hundiría. Palabras proféticas.

Al año siguiente, en agosto de 1994, se constituyen en Zaire las Fuerzas para la Defensa de la Democracia, una organización armada hutu que pondrá al Gobierno y al ejército en situación de jaque permanente. Paralelamente se crean grupos de hutus radicales —los intagohekas— que sem-

brarán el terror tanto en las ciudades como en el campo. Por otra parte, los hutus han creado Radio Democracia que, asociada a otra emisora, la extremista Rutomorangigo, difunde mensajes cargados de odio contra la comunidad tutsi.

Contra los intagohekas hutus, los tutsis crean los «sans échec», los «sans défaite» y los «sans capote» que sembrarán el terror entre la población hutu.

A pesar del ambiente de guerra civil, se intenta mantener el proceso democratizador. Pero éste recibe un nuevo golpe cuando el 6 de abril de 1994, el segundo presidente hutu, Cyprien Ntuyamira, muere en el atentado que también costó la vida a su homólogo ruandés, Juvenal Habyarimana.

Tras su muerte, se inicia un largo proceso de sucesión —en el marco de la convención nacional— que culmina en octubre de 1994 con la elección del presidente hutu Sylvestre Ntibantunganya, perteneciente al Frente para la Democratización de Burundi (FRODEBU) y del Primer Ministro Anatole Kanyenkiko que, cuatro meses más tarde, será sustituido por el tutsi, Antoine Nduwayo, de la coalición de partidos opositores.

¿Volver a empezar?

EL retorno al poder de Buyoya devuelve a su punto de partida el proceso democrático burundés. Para los tutsis, el golpe de julio es una solución, al menos a corto plazo, que evitará su genocidio. Sin embargo, permanece uno de los problemas que corroen lo más profundo de esta nación: el miedo.

De ahí la cerrazón tutsi ante un tema que para los hutus es fundamental: la cuestión militar. Los tutsis controlan el ejército. Aunque un tercio de la tropa la conforman miembros de la etnia hutu, éstos no pueden promocionar en el escalafón militar. Y es que el aparato militar es algo que los tutsis no quieren perder porque, acaso por experiencia, saben que ese 13 por 100 de la población que representan les pone en una situación de desventaja ante cualquier agresión procedente de los hutus.

Los motivos para esta desconfianza no son infundados: en menos de un año, los tutsis de Ruanda han visto morir a 500.000 de los suyos. Según algunos cálculos, tras el genocidio orquestado por el poder hutu en

el país vecino sólo sobrevivieron 20.000 del poco más de medio millón de tutsis que allí vivían.

Para la población tutsi de Burundi, el ejército es la única garantía a su protección. Las recientes acusaciones, procedentes de las elites tutsis, contra el Gobierno de Silvestre Ntibantunganya, al que inculpaban de minar la moral de las fuerzas armadas, favorecieron el desenlace golpista.

En efecto, una de las denuncias contra el depuesto mandatario realizadas por el presidente golpista Buyoya era que el Gobierno luchaba contra el propio ejército burundés lo que, según el actual mandatario se ha traducido en desánimo e indisciplina en las fuerzas armadas del país.

Los hutus encuentran en Buyoya el regreso al pasado. Una muralla que se levanta frente a sus esperanzas de vivir como ciudadanos de primera en su propia nación. Acaso el golpe signifique para ellos el principio del fin como burundeses.

Organizados en grupos insurgentes o escondidos en las colinas, los hutus ya no confían en el retorno a la democracia. Las palabras «tranquilizadoras» del nuevo presidente no merecen la confianza de una población que aún le recuerda como el presidente bajo el cual, hace ocho años, se perpetraron las matanzas que costaron la vida a 20.000 personas y ahora es el responsable de cortar el proceso democrático; sin embargo, para los hutus moderados, Buyoya es el hombre que condujo el país hacia la democracia. Y ahora lo ha vuelto a prometer.

Pero lo que no puede esconderse es que Burundi vuelve a estar en manos de dictadores y que la guerra continúa... La pregunta, ¿hasta cuándo? La respuesta muy bien la podría dar ese proverbio burundés que reza: «un bastonazo basta para quebrar los huesos pero no es suficiente para quebrar los vicios».